

revista valenciana **d'estudis autonòmics**

2019 | nº 64

Redacció i administració:

Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Passeig Albereda, 16, 46010 València
Tl. 96 192 23 44.
E-mail: rvea@gva.es

Distribució i subscripció:

Llibreria de la Generalitat (LliG)
C. Navellos, nº 15. 46003 València
Tl. 96 342 47 55
llig@gva.es
www.llig.gva.es

Producció:

Byprint Percom S.L.

ISSN: 0213-2206

Dipòsit legal: V-1172-1996

Nota de redacció: La revista no es fa responsable ni compartix necessàriament les opinions expressades pels autors, que les formulen davall la seua exclusiva responsabilitat.

La reforma de la Constitución y la propuesta del Consell Manuel Alcaraz	7
Acuerdo del Consell sobre la reforma constitucional	18
Acord del Consell sobre la reforma constitucional	34

Estudis

Algunas cuestiones sobre reforma constitucional y federalización del Estado autonómico Zulima Pérez i Seguí	50
La solidez de nuestra urdimbre territorial: reformar para mejorar Joaquín Martín Cubas	60
Perspectivas de la reforma constitucional territorial en España Andrés Boix Palop Víctor Bethencourt Rodríguez	80
Del foralismo al federalismo. Reflexiones en torno a una posible reforma constitucional del reparto de competencias civiles Ignacio Durbán Martín	110
La desnormativización constitucional del Estado social: la contrarreforma silente Ainhoa Lasa López	130
Las mujeres como sujeto constituyente: la crisis de los 40 ante la reforma constitucional M^a Concepción Torres Díaz	160
Aproximació al tema dels drets lingüístics. Seguretat i jerarquia lingüística a Suïssa i Espanya Vicenta Tasa Fuster	186

Las mujeres como sujeto constituyente:

la crisis de los 40 ante la reforma constitucional

María Concepción Torres Díaz
Abogada y Prof.ª Derecho Constitucional
Universidad de Alicante

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. OBJETIVOS. III. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: FEMINISMOS JURÍDICOS Y CONSTITUCIONALISMO. IV. REVISIÓN EPISTÉMICA. 1. Constitucionalización de la paridad. 2. Fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género. 3. Reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. V. CONSIDERACIONES FINALES.

I. Introducción

El 6 de diciembre de 2018 la Constitución española cumplió 40 años. Una fecha clave para pensar y repensar el texto constitucional desde la óptica de las mujeres como sujeto constituyente. Por tanto, desde las experiencias y vivencias de las mujeres ante el pacto de convivencia social. Y es que tras 40 años de vigencia constitucional en donde el modelo normativo de lo humano se ha venido desarrollando haciendo abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos y de sus implicaciones en la organización socio/sexual de la realidad, el momento actual requiere del reconocimiento de dos sujetos igualmente diferentes en sede constitucional – sin necesidad de que uno sea el modelo del otro-. El momento actual demanda una redefinición del sujeto '*persona*' y una resignificación de la categoría '*sexo*' como hecho biológico que implica diferencia mutua entre los sujetos sin necesidad de que exista un patrón de referencia al que haya que adaptarse o en el que haya que encajarse. Y todo ello pese a los avances normativos y jurisprudenciales en materia de igualdad de mujeres y hombres.

En este punto, conviene significar cómo la celebración del cuadragésimo aniversario de la norma suprema no ha sido algo anodino. Máxime porque ha permitido echar la vista atrás y revisar críticamente los avances sociales (y no solo) conseguidos y los retos todavía pendientes.

Obviamente, toda revisión crítica exige que se lleve a cabo valiéndose del 'género' (TORRES¹, 2018) como categoría de análisis jurídico y, por ende, constitucional si se quiere evitar que el texto constitucional entre en la llamada 'crisis de los 40'. Un concepto de 'crisis de la mediana edad' conceptualizado por autores como Erik Erikson (1968)² y a partir del cual se ha acuñado la idea de un cierto estancamiento de proyecto vital. De ahí la necesidad de revitalizar y renovar el consenso constitucional³ desde una óptica integradora con el sentir social y vivencial de las mujeres y, por ende, de la sociedad en general. Y todo ello a fin de garantizar, entre otros, (1) la constitucionalización de la paridad, (2) el reconocimiento de la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género y (3) el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. El debate y las propuestas sobre la necesidad de una reforma/revisión constitucional han ido creciendo conforme avanzaba el año 2018. Y es que el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978⁴ no ha pasado desapercibido para casi nadie, más si se tiene en cuenta que en las dos últimas convocatorias electorales a Cortes Generales – 20 de diciembre de 2015⁵ y 26 de junio de 2016⁶ – las diferentes formaciones políticas hacían públicas sus propuestas de reforma constitucional. Más reciente en el tiempo cabría aludir al *Acuerdo del Consell de la*

1. TORRES DÍAZ, María Concepción: "El sustento constitucional de la impartición de Justicia desde la perspectiva de género", en el monográfico "Mujer y Constitución" de la Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 10, diciembre 2017, pp. 181-214.

2. ERIKSON, Erik: *Identidad, Juventud y Crisis*, Paidós, Buenos Aires, 1968.

3. Con respecto al llamado 'consenso constitucional' téngase en cuenta que supuso el reconocimiento de un marco amplio y pro futuro de las diferentes opciones políticas. En estos términos se pronunció el máximo intérprete constitucional en una de sus primeras sentencias (STC 11/1981, de 8 de abril. Recurso de inconstitucionalidad promovido contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo) cuando precisó cómo "(...) la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo".

4. Sobre las actividades, jornadas, exposiciones y eventos organizados a nivel institucional con motivo del 40 aniversario de la Constitución española de 1978 puede consultarse la siguiente página web. Recuperado de: <https://www.constitucion40.com/> (fecha de consulta: 02/01/2019).

5. Consúltase el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE núm. 257, de 27 de octubre de 2015). Recuperado de: <https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11505.pdf> (fecha de consulta: 22/07/2017). Véase también los resultados de distribución de votos y escaños en el Congreso y el Senado. Recuperado de: <http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=20/12/2015> (fecha de consulta: 20/07/2017).

6. Consúltase el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE núm. 107, de 3 de mayo de 2016). Recuperado de: <https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4280.pdf> (fecha de consulta: 19/06/2017). Véase también los resultados de distribución de votos y escaños en el Congreso y el Senado. Recuperado de: <http://www.congreso.es/consti/elecciones/generales/resultados.jsp?fecha=26/06/2016> (fecha de consulta: 20/06/2017).

Generalitat Valenciana sobre la Reforma Constitucional de febrero de 2018⁷. El debate no es nuevo y las propuestas articuladas tampoco. En este sentido – y al objeto del presente artículo – cabría recordar el *Informe sobre Modificaciones de la Constitución Española*⁸ del Consejo de Estado de febrero de 2006 en donde la centralidad la ocupaban los siguientes aspectos: (1) la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, (2) la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, (3) la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y (4) la reforma del Senado. Obviamente, el escenario político, económico, social, cultural y jurídico de 2006 dista mucho del que acaece en la actualidad. Máxime, tras la crisis y recesión económica mundial⁹ cuyo punto de inflexión se puede datar en 2008¹⁰, con sus efectos a nivel global y, por ende, a nivel nacional con particularidades difíciles de obviar. De ahí la importancia de reflexionar en las líneas que siguen sobre las propuestas articuladas por las diferentes formaciones políticas en materia de reforma/revisión/cambio constitucional en el momento actual. Un momento propicio

7. Puede consultarse el *Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana sobre la Reforma Constitucional* de febrero de 2018 en el siguiente enlace. Recuperado de: <http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/Acuerdo+del+Consell+sobre+la+reforma+constitucional.pdf/ecc2fe28-4b83-4606-97db-d582d726b27b> (fecha de consulta: 22/12/2018). Desde el punto de vista del presente estudio son de resaltar los siguientes aspectos: (1) apuesta por la utilización de un lenguaje inclusivo, (2) ampliación de los valores incluyendo de forma expresa como tal la dignidad humana y la paridad, (3) revisión del preámbulo con referencia expresa a la lucha contra la violencia de género, la lucha contra el cambio climático, la promoción de un gobierno abierto y transparente, los avances en la integración de la Unión Europea, la lucha contra la corrupción, la promoción en la creación y difusión del conocimiento y la universalidad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, (4) ampliación del catálogo de derechos y mejora de sus garantías siendo de destacar el reconocimiento de los derechos políticos a mayores de 16 años, supresión expresa de la pena de muerte, delimitación como derecho subjetivo del acceso a una vivienda digna, reconocimiento del derecho a la salud y a la asistencia sanitaria universal, derecho a una muerte digna, mejora de los derechos relacionados con el ámbito laboral, etc. y, (5) reformulación del modelo territorial en línea con el federalismo.

8. Puede consultarse el texto íntegro del Informe del Consejo de Estado en el siguiente enlace. Recuperado de: <http://www.consejo-estado.es/pdf/modificaciones%20constitucion%20esp.pdf> (fecha de consulta: 19/06/2017).

9. Véase VALLEJO ZAMUDIO, Luis E.: "La crisis financiera: génesis y repercusiones", en *Apuntes del CENES*, vol. XXIX, nº 49, 2010, pp. 9-30. Véase también PINEDA SALIDO, Luis: "La crisis financiera de los Estados Unidos y la respuesta regulatoria internacional", en *Revista Aequitas*, vol. 1, 2011, pp. 129-214. De especial interés – desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de los sujetos y de los efectos de la crisis global en los derechos fundamentales y/o humanos – resulta GARCIA NEUMANN, Jaime: "La especulación financiera como delito contra la humanidad. Fundamentos de la historia de la economía", en *Via Inveniendi et Iudicandi*, vol. 6, nº 1, 2010, pp. 1-49.

10. El 15 de septiembre de 2008 se produce la quiebra de Lehman Brothers provocando la caída de las bolsas con efectos en todo el sector bancario fruto de su apuesta de negocio con las hipotecas subprime y los activos tóxicos. No obstante, si bien la caída de Lehman Brothers supuso un antes y un después a nivel global con anterioridad otras entidades habían corrido la misma suerte. Véase LAFFAYE, Sebastián y LUCÁNGELI, Jorge: "A tres años de la caída de Lehman Brothers", en *Revista del CEL. Comercio Exterior e Integración*, nº 19, 2011, pp. 21-32.

para la reflexión crítica (PÉREZ¹¹, 2015) sobre la Constitución de 1978: sus logros y conquistas, sus retos¹² y los conflictos no resueltos y/u olvidados. Y es que si algo se ha evidenciado en España con motivo de la crisis global son las debilidades de las que adolece nuestra norma suprema depositaria del pacto de convivencia social. Un pacto que si bien supuso un punto de inflexión en la España de finales de los 70 teniendo en cuenta la situación política, económica, social y jurídica de partida, ha hecho visibles olvidos injustificados desde el punto de vista socio/sexual de la realidad. Y hablar de olvidos desde el punto de vista de la realidad socio/sexual implica analizar el texto constitucional desde la perspectiva conflictual, esto es, implica identificar los conflictos incorporados en el seno paccional y, por ende, los conflictos desatendidos o desoídos. Esto es, los conflictos que el constituyente del 78 no consideró merecedores de ser incorporados al pacto fundacional de convivencia social. Desde este prisma de análisis cabe denunciar como el andamiaje constitucional se ha sustentado (y sustenta) sobre la subordinación sexual de las mujeres en el sistema sexo/género. Esta subordinación – naturalizada y normalizada – se puede decir que se ha erigido en la '*contradicción principal*', esto es, en el conflicto primigenio y no resuelto sobre el que se han articulado el resto de conflictos como los propios del capital/trabajo. En este punto cabe citar a Millet¹³ con su *Política sexual* (*Sexual Politics*, 1970), a De Beauvoir¹⁴ con *El Segundo Sexo* (*Le Deuxième Sexe*, 1949), a Pateman¹⁵ con *El contrato sexual* (*The Sexual Contract*, 1988), a Firestone¹⁶ con *La dialéctica del sexo* (*The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, 1970), a Lerner¹⁷ con *La creación del patriarcado* (*The Creation of Patriarchy*, 1988), a

11. PÉREZ ROYO, Javier: *La Reforma Constitucional Inviabile*, Catarata, Madrid, 2015.

12. En relación a los retos que en la España de 1978 supuso la aprobación de la Constitución véase GALLEGU DÍAZ, Soledad y DE LA CUADRA, Bonifacio: *Crónica secreta de la Constitución*, Tecnos, Madrid, 1989.

13. MILLET, Kate: *Política Sexual*, Traducción Ana María Bravo García, Cátedra, Valencia, 2017.

14. DE BEAUVOIR, Simone: *El Segundo Sexo*, Traducción de Alicia Martorell, Cátedra, Valencia, 2017.

15. PATEMAN, Carole: *El contrato sexual*, Traducción de Luisa Femenías, Anthropos, Barcelona, 1995.

16. FIRESTONE, Shulamith: *La dialéctica del sexo*, Traducción de Ramón Ribé Queralt, Kairós, Barcelona, 1976.

17. LERNER, Gerda: *La creación del patriarcado*, Traducción de Mónica Tusell, Editorial Crítica, Barcelona, 1990.

Fraser¹⁸ con *Fortunas del Feminismo* (2015), a Segato¹⁹ con *La guerra contra las mujeres* (2016), etc., y a muchas otras teóricas que han puesto el foco de atención en la diferencia sexual de mujeres y hombres y en la construcción social que dicha diferencia ha llevado de suyo a la hora de asignar espacios, legitimar experiencias, dotar de autoridad a determinadas voces y narrativas discursivas y, en definitiva, reconocer estatus.

Lo sucintamente expuesto en estas notas introductorias obligan a un análisis *iusfeminista* (o desde los feminismos jurídicos) por cuanto se observa una conexión directa entre los sujetos artífices (y dadores) del pacto constitucional con la ideación de un modelo normativo de lo humano extrapolado como universal y plasmado a lo largo del texto constitucional. Un modelo a partir del cual se ha pensado jurídicamente y teorizado doctrinalmente en un único sujeto jurídico/político que ha hecho abstracción de la sexuación de los sujetos de Derecho. Desde estas premisas, el presente artículo invita a una aproximación crítica al texto constitucional tanto formal como sustancialmente y a un acercamiento capaz de interpelarlo.

Llegados a este punto cabría reseñar algunas de las cuestiones claves que subyacen en esta propuesta de análisis crítico. En este sentido, desde el punto de vista epistémico y conceptual, una de las preguntas claves sería: ¿Qué supone hablar (y/o pensar) la Constitución desde la posición de las mujeres como sujeto constituyente? Abundando más en la materia: ¿Qué supone pensar la Constitución desde los conocimientos situados? Sendas cuestiones no resultan anodinas desde el momento en que invitan a echar la vista atrás en aras de determinar:

- (1) En quién pensó el constituyente del 78 – modelo normativo de lo humano – cuando dotó de contenido a los distintos preceptos del texto constitucional:
 - (a) ¿Se pensó en las mujeres y en su subjetividad jurídica y política en el momento de la delimitación, por ejemplo, del derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral?
 - (b) ¿Se pensó en las mujeres y en su condición biológica y sexual cuando se decidió conceptualizar como principio rector (y no como derecho fundamental) el acceso y protección de la salud?
 - (c) ¿Se pensó en las mujeres y en su derecho a decidir libremente sobre su maternidad como muestra del reconocimiento constitucional de la autonomía corporal en el ámbito sexual y reproductivo cuando se optó por modificar la expresión "todas las personas" en el borrador de Constitución por "todos" en el reconocimiento del derecho a la vida?

18. FRASER, Nancy: *Fortunas del feminismo*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.

19. SEGATO, Rita Laura: *La guerra contra las mujeres*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2016.

- (d) ¿Se pensó en las mujeres a la hora de fijar la composición y elección, de órganos constitucionales tan relevantes y con tanto poder como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional?
- (e) ¿Se pensó en las mujeres cuando se constitucionalizó la discriminación de éstas en la sucesión a la Corona?
- (2) Y junto a lo anterior, subyacen otras cuestiones: ¿En qué términos y desde qué postulados teóricos y doctrinales se ha avanzado en materia de igualdad y no discriminación desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto que sujeto constitucional?
- (3) ¿Quién habla y desde dónde se habla y a quién se dirige el texto de la Constitución? ¿En qué lugar sitúa el texto constitucional a los sujetos constituyentes y en qué términos se perfila a los sujetos constituidos? ¿Quiénes fueron los pactantes y quiénes las pactadas en la Constitución de 1978?
- (4) ¿Cuáles han sido (y son) las narrativas tenidas en cuenta y/o legitimadas en la configuración de los derechos? ¿Cuáles han sido (y son) las experiencias humanas tenidas en cuenta desde la construcción teórica/doctrinal/jurisprudencial extrapolable a la *praxis* jurídica del foro?

Las cuestiones apuntadas en estas notas introductorias toman como base los datos publicados por distintas organizaciones e instituciones derivados de estudios cuantitativos y empíricos sobre la situación de las mujeres no solo a nivel estatal sino a nivel europeo e internacional. Datos²⁰ que se hacen eco de la brecha salarial de género, de la infrarrepresentación de las mujeres en puestos de dirección política, económica, social, educativa y/o cultural, de la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, del acoso sexual y/o por razón de sexo, de la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad, etc. y, en definitiva, de un imaginario social discriminatorio – discriminación estructural – hacia todas las mujeres con carácter general. Y es en este contexto social desde donde comienza a hablarse – en distintos ámbitos – de la necesidad de un cambio, una revisión y/o una reforma constitucional, etc. Ahora bien, ¿cuál es el marco conceptual y normativo desde el que se han articulado las distintas propuestas de reforma? Y es que se observa la falta de un abordaje *iusfeminista* de las propuestas hechas públicas con la excepción, casi en exclusiva, de los trabajos llevados a cabo por

20. Desde el punto de vista empírico cabría referenciar los recientes datos publicados por la OCDE en el Informe "La búsqueda de la igualdad de género: una batalla cuesta arriba" en donde se observa cómo pese a los avances normativos en materia de igualdad en la mayoría de países la desigualdad del sistema sexo/género persiste. En este sentido se enmarca la llamada a la acción de la OCDE a los países. En línea con lo expuesto consúltase OEDC: *The Pursuit of Gender Equality: an uphill battle* (2017). Informe en línea. Recuperado de: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-pursuit-of-gender-equality_9789264281318-en (fecha de consulta: 04/10/2017).

integrantes de la Red Feminista de Derecho Constitucional (ESQUEMBRE, 2017²¹; TORRES, 2014a²² y 2014b²³; GÓMEZ, 2018²⁴, entre otras). Trabajos e investigaciones desde donde se apuesta por una reforma constituyente²⁵. Reforma cuyos fundamentos se articulan desde la perspectiva crítica de la dimensión de género (SCOTT, 1990)²⁶ como Teoría Crítica del Derecho²⁷ y, específicamente, del Derecho Constitucional²⁸ en aras de desenmascarar

21. ESQUEMBRE CERDÁ, María del Mar: "Las mujeres ante el cambio constitucional. Algunos apuntes desde una perspectiva feminista para una "reforma constituyente" de la Constitución española", en *Revista "Cuadernos Manuel Giménez Abad"*, nº Extra 5, 2017, pp. 75-92.

22. TORRES DÍAZ, María Concepción: "El derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental: crítica constitucional desde el paradigma feminista", en VV.AA.: *Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico. Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla*, 2014, pp. 641-655.

23. TORRES DÍAZ, María Concepción: "Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: cuerpos y subjetividad desde la periferia constitucional", en León Alonso, Marta y Sgró Ruata, María Candelaria (comp.): *La reforma del aborto en España: perspectivas de un debate (re)emergente*, 2014, pp. 119-148.

24. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar: *Una Constituyente feminista: ¿Cómo reformar la Constitución con perspectiva de género?*, Marcial Pons, Madrid, 2017.

25. Sobre la catalogación 'reforma constituyente' consúltase la *Declaración de Intenciones* aprobada por la Red Feminista de Derecho Constitucional en el marco del XII Encuentro de Biar: "Reforma constitucional, nuevo escenario político y perspectiva de género" que tuvo lugar en la Sede Universitaria de Biar los días 15, 16 y 17 de julio de 2015. Con respecto a la 'reforma constituyente' la propuesta se basa en una revisión de la Constitución con perspectiva de género. Puede ampliarse información en el siguiente enlace. Recuperado de: <http://feministasconstitucional.org/declaracion-de-intenciones-de-la-rfdc-xii-encuentro-biar-2015/> (fecha de consulta: 22/08/2017).

26. SCOTT, Joan W.: "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en AMELANG, James S. y NASH, Mary (coords.): *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, Institutió Alfons el Magnànim, 1990, pp. 23-58.

27. Sobre la Teoría Crítica del Derecho véase BONETTO DE SCANDOLI, María Susana y PIÑERO DE RUIZ, María Teresa: "Teoría Crítica del Derecho", en *Revista Estudios*, nº 3, 1994, pp. 63-71. Estas autoras señalan la importancia de desmitificar la 'neutralidad' del discurso jurídico. Desde este prisma apuestan por la inserción del derecho en las formas de sociabilidad para lo cual resulta necesario revisar las teorías tradicionales que sustentan los poderes establecidos. Véase también NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro: "Teorías críticas del derecho: observaciones sobre el modelo de ciencia jurídica", en *Anuario de filosofía del derecho*, nº 26, 2010, pp. 413-434. Con respecto al derecho como un instrumento 'neutral' las críticas articuladas se ciernen en cómo el discurso jurídico se ha encargado de ocultar el poder subyacente desde el que se parte a la hora de elaborar la norma, aplicarla o interpretarla.

28. Sobre el constitucionalismo crítico véase DE CABO MARÍN, Carlos: *Pensamiento crítico, Constitucionalismo crítico*. 1ª edición, Trotta, Madrid, 2014. Véase también DE CABO MARÍN, Carlos: *Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución*, Trotta, Madrid, 2010. Sobre las aportaciones y las potencialidades del constitucionalismo crítico al iusfeminismo jurídico resulta de interés TORRES DÍAZ, María Concepción: "Epistemología feminista y constitucionalismo crítico: premisas metodológicas para la reflexión dialéctica", en DE CABO MARÍN, Carlos, ASENSI SABATER, José, y BALAGUER CALLEJÓN, Francisco: *Constitucionalismo crítico: Liber amicorum Carlos de Cabo Marín*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 381-398.

la dimensión patriarcal del Derecho²⁹ y los derechos insertos en el texto constitucional.

Con respecto a la categoría 'género' como categoría de análisis crítico – y siguiendo a Scott (1990) – cabría resaltar la legitimidad académica que el término 'género' atribuye a los estudios e investigaciones por cuanto su utilización como categoría de análisis implica tener en cuenta la realidad socio/sexual de mujeres y hombres, rechazando y/o cuestionando estudios cuyo sustento teórico están basados en una idea caduca de las esferas separadas entre mujeres y hombres y que, desde el ámbito jurídico, se podría traducir en el no reconocimiento de la *mixitud* humana y en la abstracción sexual de los sujetos de Derecho. En esta línea, resulta de interés extraer las siguientes aportaciones teóricas del pensamiento de Scott cuando señala cómo "(...) el término género forma parte de una tentativa de las feministas (...) para reivindicar un territorio definidor específico, de insistir en la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes para explicar la persistente desigualdad entre mujeres y hombres". Se observa cómo el concepto 'género' se erige en crítico con los elementos constitutivos de las relaciones sociales y, por ende, jurídicas que han legitimado las diferencias (y desigualdades) articuladas (o construidas) en torno a los sexos (biológicos) siéndoles atribuidas importantes elementos significantes de poder o carentes del mismo.

II. Objetivos

Expuesto lo anterior, los objetivos del presente trabajo podrían sintetizarse en los siguientes *ítems*:

- Reflexionar sobre la posición jurídica de las mujeres en el momento constituyente (SEVILLA³⁰, 2006);
- Reflexionar y cuestionar el marco teórico conceptual sobre el que se ha construido a las mujeres desde el discurso jurídico, en general;

29. Sobre la dimensión patriarcal del Derecho véase FACIO, Alda: *Feminismo, género y patriarcalizado*. Artículo en línea, 1990. Recuperado de: <http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Feminismo-g%C3%A9nero-y-patriarcalizado.-Alda-Facio.pdf> (fecha de consulta: 22/08/2017). Conviene reseñar – en palabras de Facio – que "(...) la diferencia sexual ha significado desigualdad legal en perjuicio de las mujeres". Alude esta autora a cómo "(...) conceptualmente, las diferencias entre los sexos no implican desigualdad legal". No obstante, desde el punto de vista histórico y de la configuración socio/sexual de la realidad "las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están (y han estado) estrechamente ligadas". En esta misma línea cabe citar a PITCH, Tamar: "Sexo y género de y en el Derecho: el feminismo jurídico", en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 44, 2010, pp. 435-459. Al objeto del presente trabajo académico resulta de interés resaltar las aportaciones de esta autora por cuanto invitan a reflexionar sobre la eficacia del derecho y los cambios normativos para los derechos de las mujeres.

30. SEVILLA MERINO, Julia y otras (coords.): *Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente*, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006.

- Reflexionar sobre la situación jurídica de las mujeres en materia de derechos y participación en el momento actual;
- Reflexionar sobre las potencialidades del paradigma feminista (TORRES³¹, 2019) en el análisis constitucional ante los riesgos de involución;
- Reflexionar sobre las propuestas articuladas de cambio/revisión/reforma constitucional;
- Reflexionar sobre las aportaciones en el ámbito jurídico/constitucional de revisar el texto constitucional desde postulados teóricos *iusfeministas* (o de los feminismos jurídicos).

Con respecto al objetivo número dos del presente elenco, esto es, con respecto a las premisas sobre las que el discurso jurídico ha construido a las mujeres cabría focalizar los análisis teniendo en cuenta, en todo momento, quién es el sujeto cognoscente, el sujeto/objeto de conocimiento, la voz locativa desde dónde se legitiman (o se ignoran) los discursos y quién es el sujeto (o los sujetos) que ostentan (o han ostentado) esa capacidad de legitimación discursiva. Obviamente, estas premisas de partida obligan a hacer referencia a los conocimientos situados y a sus aportaciones y potencialidades para el análisis del fenómeno jurídico en todas sus dimensiones.

III. Marco teórico-conceptual: feminismos jurídicos y constitucionalismo

Desde el punto de vista conceptual son varias las teorías que dan sustento teórico y doctrinal a las reflexiones y propuestas recogidas en el presente estudio. En este sentido cabría distinguir dos dimensiones teóricas que ostentan un lugar protagónico. Por una parte, el estudio de las teorías epistemológicas feministas entre las que cabe citar las teorías del punto de vista feminista, el empirismo feminista y el posmodernismo feminista (TORRES³², 2018). En un segundo lugar, son de resaltar las teorías que cabría englobar dentro de los estudios críticos del Derecho y, específicamente, los *Critical Legal Studies* y el *iusfeminismo* o *Feminist Jurisprudence*, *Feminist Legal Theory* o *Feminist Legal Thought*. Sin perjuicio de otras consideraciones, todas estas teorías han coincidido en cuestionar

31. TORRES DÍAZ, María Concepción: "Iusfeminismo, género y discurso jurídico: análisis desde la praxis y estado de la cuestión", en *Revista Pensamiento Constitucional*, nº 23, Perú (en imprenta), 2019.

32. TORRES DÍAZ, María Concepción: *Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia*. Editor: Xarxa Vives d'Universitats, 2018.

la neutralidad del discurso jurídico (RIFKIN³³, 1980; SCALES³⁴, 1981 y, OLSEN³⁵, 1990). Esto es, la neutralidad del Derecho contribuyendo a sentar las bases del llamado derecho antidiscriminatorio (BÀRRERE³⁶, 2008). Centrando las siguientes líneas en el cuestionamiento de la neutralidad del Derecho, los aportes teóricos no son nuevos. En este sentido cabe reseñar las teorías del *Uso Alternativo del Derecho* que ya cuestionaban en los años 70 del siglo anterior que existiera una interpretación objetiva y neutra de la norma. Por tanto, en la línea de las teorías enmarcadas en la *Feminist Jurisprudence* que han partido del privilegio epistémico de la visión situada y/o posicionada de las mujeres en y ante el Derecho. Llegados a este punto, otras referencias epistemológicas ineludibles que cabría citar en estrecha conexión con la construcción jurídica del sujeto normativo de lo humano desde el punto de vista constitucional, serían: (1) la 'otredad' beauvoiriana, (2) la teorías sobre las 'capacidades' de Nussbaum³⁷, (3) la construcción teórica sobre la 'empatía' de Hunt³⁸, (4) el llamado 'universo interactivo' de Benhabib³⁹, (5) la 'subalternidad' de Spivak⁴⁰ y (6) las referencias a la 'paradoja de la centralidad' desarrollada por Edward Said⁴¹. El nexo común de todas estas teorías se encuentra en cuestionar la hegemonía del discurso dominante a la hora de dotar de centralidad y focalizar las relaciones políticas, económicas, culturales, jurídicas y personales desde la cosmovisión de un sujeto predefinido como abstracto pero construido desde un modelo de 'lo humano' excluyente para con los otros, a saber: varón, blanco, propietario y heterosexual. Ante esta construcción teórica, el Derecho no ha permanecido al margen. Al contrario, ha contribuido a su consolidación

33. RIFKIN, Janet: "Toward a Feminist Jurisprudence", *Harvard Women's Law Journal*, 3, 1980, pp. 83-95.

34. SCALES, Ann C.: "Toward a Feminist Jurisprudence". *Indiana Law Journal*, 56 (3), 1981, pp. 375-444.

35. OLSEN, Frances: "El sexo del Derecho", en KAIRYS, David (ed.), *The Politics of Law*, Traducción de Mariela Santoro y Christian Courtis, Nueva York, Pantheon, pp. 452-467.

36. BÀRRERE UNZUNBETA, María Ángeles: "Género, discriminación y violencia contra las mujeres", en Laurenzo Copello, Patricia y otras. *Género, violencia y derecho*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 27-48.

37. NUSSBAUM, Martha: *Women and Human Development: the capabilities approach*, CUP, 2000.

38. HUNT, Lynn: *La invención de los derechos humanos*, Traducción de Jordi Beltrán, Tusquets, Barcelona, 2009.

39. BENHABIB, Seyla: *El ser y el otro en la ética contemporánea*, Gedisa, Barcelona, 2009.

40. SPIVAK, Gayatri Chakrovorty: "¿Puede hablar el subalterno?", en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 39, Bogotá, 2003, pp. 297-364.

41. SAID, Edward W.: *Cultura e imperialismo*, Anagrama, Barcelona, 1996.

a través de narrativas y discursos jurídicos que han venido a fortalecer la idea de un sujeto central en contraposición a los 'no sujetos' o los 'sujetos periféricos'.

La Constitución española de 1978 en el momento de su elaboración y posterior aprobación no permaneció incólume ante esta realidad. De ahí que el sujeto que permea en su articulado sea un sujeto varón. Y de ahí que las demandas específicas de las mujeres en el momento de la elaboración del pacto de convivencia social no se tuvieran en cuenta (TORRES⁴², 2015). Desde estos postulados es desde donde cabe hablar de la 'otredad constitucional' de las mujeres. Una 'otredad' que se observa, por ejemplo, cuando se advierte que el término 'mujer' únicamente aparece en dos momentos en la Constitución española de 1978: (1) artículo 32⁴³: relativo al matrimonio, constitucionalizando, por tanto, el modelo de mujer esposa-madre⁴⁴ y, (2) artículo 57⁴⁵: relativo a la sucesión de la Corona, constitucionalizando la discriminación de las mujeres en la sucesión a la Jefatura de Estado – uno de los más altos poderes no solo a nivel simbólico – y, contradiciendo la delimitación constitucional de la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1.1), como principio rector y mandato de optimización a los poderes públicos (artículo 9.2) y como derecho fundamental (artículo 14).

42. TORRES DÍAZ, María Concepción: "Mujeres y cuerpos o la Transición desde los márgenes: el olvido intencionado de los derechos sexuales y reproductivos", en *I Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política "Transiciones en Marcha"*, MANAS, Carmen y otras, Universidad de Alicante, 2015, pp. 98-111.

43. La dicción literal del artículo 32 CE dispone textualmente: "1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos".

44. En relación con la constitucionalización de la mujer-madre téngase en cuenta la dicción literal del artículo 39 de la CE en el ámbito de la protección de la familia. Significativos a los objetos de este estudio resultan los párrafos 1 y 2: "1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad (...)."

45. El artículo 57 de la CE es del siguiente tenor: "1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión de la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 5. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica".

En línea con el concepto de *'otredad constitucional'* o *'subjetividad periférica'* de las mujeres en y ante el texto constitucional cabría realizar otras observaciones críticas que denotan el lugar residual de las mujeres en el pacto de convivencia social. En este sentido, y desde el análisis crítico del discurso jurídico, es de significar que mientras que la palabra *'españoles'* aparece en dieciséis ocasiones la palabra *'españolas'* aparece únicamente en dos ocasiones pero no para reconocer la subjetividad jurídica y política de las mujeres sino para otorgar reconocimiento constitucional a las *'lenguas españolas'* (artículo 3). Las mismas consideraciones críticas cabría realizar en relación con la acepción *'ciudadanos'* que aparece en doce ocasiones vinculados al reconocimiento del sujeto jurídico mientras que *'ciudadanas'* aparece una única vez para aludir a las *'manifestaciones ciudadanas'* (artículo 77).

Lo expuesto evidencia la importancia del lenguaje inclusivo en cualquier propuesta de reforma constitucional. En estos términos se pronuncia Astola⁴⁶ (2008) al precisar cómo el lenguaje jurídico *"(...) se ha configurado dentro del sistema patriarcal"* dando lugar a que conceptos universales se articularan sobre la ausencia de las mujeres *"(...) confundiendo humanidad con humanos de sexo masculino"*. En la misma línea se pronuncia Sevilla⁴⁷ (2008) cuando no duda en señalar cómo *"(...) por medio del lenguaje adquieren corporeidad las ideas, los pensamientos, se califican las acciones, se establecen las relaciones entre las personas (...)"* y, más importante si cabe, se establecen los pactos y *"(...) se incluye o se excluye (...)"*. Sevilla apunta un aspecto importante a tener en cuenta desde el punto de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en sede constitucional, y es que advierte cómo el lenguaje constituye *"(...) un acto de dominio (...)"* y, por tanto, de poder y el lenguaje jurídico no ha sido ajeno a esta connotación.

Lo comentado permite volver a la reflexión inicial sobre los términos en los que el lenguaje jurídico ha construido a las mujeres en tanto que sujetos jurídico/políticos así como los términos en los que el reconocimiento de derechos en sede constitucional – en tanto que sujetos atravesados por la categoría 'sexo' – han sido efectivos. Desde estas premisas la pregunta resulta obligada: ¿En qué términos han sido construidas las mujeres desde *'lo jurídico'*? Varias consideraciones previas:

1. Las mujeres desde *'lo jurídico'* han sido construidas desde el reconocimiento de la igualdad formal, por tanto, haciendo abstracción de las implicaciones sociales de su sexo biológico en

46. ASTOLA MADARIAGA, Jasone: "El género en el lenguaje jurídico: utilización formal y material", en MONTESINOS SÁNCHEZ, Nieves y ESQUEMBRE CERDÁ, María del Mar (coords.), *Mujeres en democracia, Feminismos/s* 12, Centro de Estudios de la Mujer, Universidad de Alicante, 2008, pp. 33 y ss.

47. SEVILLA MERINO, Julia: "Representación y lenguaje", en MONTESINOS SÁNCHEZ, Nieves y ESQUEMBRE CERDÁ, María del Mar (coords.), *Mujeres en democracia ... op.cit.* pp. 55 y ss.

sociedades marcadas por una forma de socialización diferenciada (y discriminatoria) derivada del sistema sexo/género;

2. Las mujeres desde '*lo jurídico*' han sido construidas desde la otredad, alteridad, subalternidad, etc. al sujeto universal. Por tanto, como sujetos necesitados de tutela y protección sin cuestionar las asimetrías de poder del sistema sexo/género que las hace vulnerables, con carácter general;
3. Las mujeres desde '*lo jurídico*' han sido construidas como sujetos disponibles, por tanto, como cuerpos destinados a las tareas de cuidados, como cuerpos dirigidos a la reproducción de la especie o como cuerpos destinados a satisfacer necesidades sexuales ajenas. Por tanto, como sujetos/cuerpos con narrativas periféricas;
4. Por último, las mujeres desde '*lo jurídico*' han sido construidas como sujetos heterodesignados, esto es, como sujetos heterónomos que no autónomos. Como sujetos sobre los que deciden otros a fin de garantizar el orden social establecido.

Lo expuesto en párrafos anteriores permite una reflexión crítica sobre debates en ciernes en el momento actual y que se puede afirmar que hunden sus raíces en la no participación (o en una participación residual) de las mujeres como sujetos constituyentes en el momento del pacto de convivencia social. Téngase en cuenta y recuérdese que la Constitución española fue redactada por 7 varones (padres de la Constitución), sin olvidar a las madres del texto constitucional (27 mujeres parlamentarias de la legislatura constituyente) cuyas miradas críticas y opiniones discrepantes quedaron plasmadas en los debates parlamentarios.

Sin perjuicio de lo expuesto, el momento actual exige que las mujeres sean sujetos constituyentes. Las propuestas para dar cobertura jurídica⁴⁸ a la gestación por sustitución y/o maternidad subrogada (TORRES, 2019)⁴⁹, los intentos por reglamentar o legalizar la prostitución, el cuestionamiento – desde distintos foros – sobre las modificaciones normativas en el ámbito penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituyen solo algunos ejemplos del frágil reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en sede constitucional por lo que no resulta aventurado catalogar dicha subjetividad como 'periférica' por los riesgos latentes de involución.

48. Consúltase la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario UpyD para la creación de un marco regulatorio para la gestación subrogada (2015). Véase también la Proposición no de Ley sobre Gestación Subrogada del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Madrid (2016). Más reciente en el tiempo véase la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso (2017).

49. TORRES DÍAZ, María Concepción: "El discurso jurídico sobre el cuerpo de las mujeres; o, la artificiosa articulación del derecho a la gestación por sustitución", en CARRIO SAMPEDRO, Alberto, *Gestación subrogada. Análisis crítico y propuestas de regulación*, Col. Filosofía y Derecho, Marcial Pons, Barcelona, 2019.

IV. Revisión epistémica. Constitucionalización de la paridad, fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género y reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos

La constitución como pacto de convivencia social no puede permanecer ajena a la sexuación de los sujetos artífices y dadores del mismo. Por tanto, no puede permanecer ajena a las relaciones derivadas de la forma de socialización del sistema sexo/género. La constitución, en tanto que pacto, es fruto de la creación humana y, por tanto, debe reflejar el sentir social de su momento pero con visos de futuro si lo que ansía es gozar de la legitimidad constituyente necesaria para su vigencia en el tiempo. Desde estas premisas resulta obvio que el momento actual requiere de una renovación de la legitimidad constituyente originaria en aras de que la subjetividad jurídica y política de las mujeres alcance un verdadero rango constitucional. Una subjetividad que –sin perjuicio de otras consideraciones– debe buscar su anclaje constitucional en tres ámbitos específicos: (1) constitucionalización de la paridad, (2) fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género y (3) reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Con respecto a la contitucionalización de la paridad, deviene en exigencia democrática desde el momento en que lleva implícito un reconocimiento de la *mixitud* de la humanidad y, por ende, una reflexión inaplazable sobre la necesidad de un nuevo contrato social de mujeres y hombres (MARTÍNEZ⁵⁰, 2009). La articulación actual de la igualdad constitucional en los artículos 1.1, 9.2 y 14 de la CE, y su posterior desarrollo normativo infraconstitucional, siendo importantes han resultado insuficientes si lo que se quiere es conseguir una igualdad que no haga abstracción de la sexuación de los sujetos de Derecho y que sea capaz de ir más allá de la igualdad formal (o legal) para evitar los efectos lesivos de

50. MARTÍNEZ SAMPERE, Eva: "Hacia la plena ciudadanía", FREIXES SAN JUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia, Género, *Constitución y Estatutos de Autonomía*, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2005, pp. 45-66.

la indiferencia jurídica de las diferencias. De ahí que se apueste por una constitucionalización de la paridad de forma expresa como baluarte democrático en los términos de la *'Declaración de Atenas'*, adoptada en la Primera Cumbre Europea "Mujeres en el Poder", celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. Cabe significar –a los objetos del presente estudio– cómo tras el reconocimiento de la igualdad como derecho humano fundamental se insta a los Estados a garantizar y a asegurar una participación igual de ciudadanas y ciudadanos en la vida pública y política. En la misma línea pero de forma más contundente queda recogida dicha exigencia en la *'Declaración de Cádiz'*, adoptada en la Segunda Cumbre Europea de "Mujeres en el Poder", cuando se afirma sin ambages que la calidad de las democracias requiere de una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de representatividad y en todos los ámbitos y niveles de toma de decisiones. A nivel infraconstitucional no es hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres cuando se observa las potencialidades (y los obstáculos en cuanto a su materialidad) del principio de presencia y/o composición equilibrada. En relación a las resistencias téngase en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en sentencias como STC 12/2008, de 29 de enero, en donde avala la constitucionalidad de las listas paritarias incorporadas en el ordenamiento jurídico interno a través del artículo 44 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Significativas resultan las palabras del máximo intérprete constitucional cuando precisa que la exigencia del principio de composición equilibrada en la configuración de las listas electorales (FJ. 5) *"(...) no suponen un tratamiento peyorativo de ninguno de los sexos, ya que, en puridad, ni siquiera plasman un tratamiento diferenciado en razón del sexo de los candidatos, habida cuenta de que las proporciones se establecen por igual para los candidatos de uno y otro sexo"*. Abundando más en la materia significa que: *"(...) no se trata (...) de una medida basada en los criterios de mayoría/minoría (como sucedería si se tomase en cuenta como elementos de diferenciación, por ejemplo, la raza o la edad), sino atendiendo a un criterio (el sexo) que de manera universal divide a la sociedad en dos grupos porcentualmente equilibrados"*. Colige, finalmente, el Tribunal Constitucional cómo *"(...) exigir de los partidos políticos que cumplan con su condición constitucional de instrumentos para la participación política (art. 6 CE), mediante una integración de sus candidaturas que permita la participación equilibrada de ambos sexos, supone servirse de los partidos para hacer realidad la efectividad en el disfrute de los derechos exigida por el art. 9.2 CE"*.

En la misma línea que la sentencia anterior cabría referenciar la STC 13/2009, de 19 de enero, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra una serie de preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Cabe reseñar el FJ 10 en donde el Tribunal Constitucional recuerda lo siguiente:

"(...) la igualdad que el art. 1.1 de la Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico –inherente, junto con el valor justicia, a la forma del Estado social que ese ordenamiento reviste, pero también, a la de Estado de Derecho– no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el art. 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un deber de abstención en la generación de diferencias arbitrarias, sino asimismo en la índole sustancial recogida en el art. 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y de los grupos sea real y efectiva (...)"

Lo recogido en los párrafos anteriores pone de manifiesto los avances normativos y jurisprudenciales de los últimos años. Avances no exentos de riesgos de involución en relación, en este caso concreto, con la paridad al no formar parte del pacto de convivencia social, quedando su efectividad y materialidad al *albur* de desarrollos normativos infraconstitucionales que penden de mayorías políticas y alternancias de gobierno no siempre sensibles a la visión de género. De ahí la exigencia de la constitucionalización de la paridad y su inserción en el texto constitucional con carácter transversal siendo esencial su delimitación no solo como derecho fundamental sino también como valor y principio constitucional.

En lo que atañe a la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género los datos estadísticos sobre mujeres asesinadas en el ámbito relacional de la pareja o expareja desde que hay registros (979 mujeres asesinadas a fecha de 22 de enero de 2019)⁵¹ son lo suficientemente contundentes para que se pueda afirmar que la articulación de las actuales sociedades democráticas se han erigido sobre la subordinación socio/sexual de las mujeres, esto es, sobre la desigualdad estructural (y en muchos casos violenta) de las mujeres en los ámbitos privados/domésticos con irradiación en el resto de ámbitos de interacción social. Y ello a pesar de contar desde 2004 con una ley integral para el abordaje de este tipo de violencia que difiere de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Una ley, LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento y que supuso un antes y un después en el reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres por cuanto reconocía –en ese abordaje multidisciplinar de la violencia de género que se plasma en su articulado– implícitamente el '*riesgo*' de ser mujeres. Una ley que pese al aval constitucional (STC 58/2008, de 14 de mayo) no ha dejado de estar

51. Ficha de datos estadísticos sobre mujeres víctimas mortales de violencia de género. Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Recuperado de: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/Vmortales_2019_01_22.pdf (fecha de consulta: 27/01/2019).

cuestionada sobre todo en lo que afecta a las modificaciones penales introducidas en preceptos como los artículos 153 y 173 del Código Penal. Pero una ley que, pese a todo, se ha tomado como modelo o guía en países de nuestro entorno europeo (y no solo). Una ley que tiene en cuenta la desigualdad estructural del sistema sexo/género que ha invisibilizado y/o naturalizado el pacto socio/sexual –o, *contrato sexual* en palabras de Pateman–. De ahí que se torne en requisito *sine qua non* apelar a la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género en sede constitucional tributario de todas las mujeres sin excepción en aras de dotarle de las máximas garantías constitucionales y en aras de evitar que desarrollos normativos, interpretaciones y/o aplicaciones sesgadas desvirtúen el afianzamiento de un marco interpretativo sensible al género⁵² que ha permitido (y está permitiendo pese a las resistencias) conceptualizar la violencia de género como (1) la manifestación violenta de la desigualdad, (2) como una forma de discriminación y (3) como una vulneración de los derechos humanos (fundamentales) de las mujeres.

Las notas reseñadas resultan primordiales a la hora de diferenciar la violencia de género de cualquier otro tipo de violencia interpersonal y vienen a avalar un abordaje específico y especializado⁵³ para su efectividad. Y es que si hay algo que diferencia la violencia de género de cualquier otro tipo de violencia es el componente sexista que lleva implícita y que se concreta en lo que significa ser mujer en un contexto de desigualdad estructural. A nivel normativo/conceptual conviene referenciar la dicción del artículo 1.1 de Ley Orgánica 1/2004

52. Con respecto a la interpretación y aplicación normativa desde la perspectiva de género, consúltense: (1) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 13/06/2018. Sinopsis analítica: Tratamiento de la víctima de violencia de género en su doble condición de víctima/testigo en el proceso penal. Aplicación de la perspectiva de género, (2) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 25/09/2018. Sinopsis analítica: Aplicación de la agravante de género. Acreditación de la dominación del acusado sobre la víctima, (3) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 25/05/2018. Sinopsis analítica: Aplicación de la perspectiva de género en un caso de intento de asesinato y maltrato de un hombre a su pareja, (4) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 20/12/2018. Sinopsis analítica: Interpretación del supuesto de agresión recíproca entre hombre y mujer en relación de pareja o expareja. Inexistencia del ánimo de dominación o machismo en la conducta del hombre. Apreciación objetiva del maltrato sin aditamentos de prueba subjetivos. Imposibilidad de degradar los hechos de maltrato a delito leve del art. 147.3 CP cuando se trata de agresión mutua de hombre y mujer en el ámbito relacional previsto en el art. 153 CP.

53. En relación con la exigencia de un abordaje específico y especializado de la violencia de género ténganse en cuenta: (1) *Guía de Buenas Prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género*, 2018. Fuente: Consejo General del Poder Judicial, (2) *Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Trata de Seres Humanos*, 2018. Fuente: Consejo General del Poder Judicial, (3) *Guía Enfoque de Género en la Actuación Letrada. Guía Práctica para la Abogacía*, 2017. Fuente: Consejo General de la Abogacía Española, (4) *Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*, 2016. Fuente: Consejo General del Poder Judicial, entre otras. Consúltense también la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

y conviene significar cómo la delimitación normativa que se recoge en la ley toma como base parámetros constitucionales y el marco jurídico internacional (*Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer*, 1979; *Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer*, 1993; *Resoluciones de las Cumbres Internacionales sobre la Mujer*; *Informe del Parlamento Europeo*, 1997; *Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas*, 1997, etc.). Más reciente en el tiempo es el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica hecho en Estambul (2011), el instrumento jurídico clave y que está marcando y va a marcar el abordaje futuro ante este tipo de violencia en aras de un reconocimiento expreso a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental.

Al hilo de lo expuesto, y teniendo en cuenta las voces críticas en relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conviene centrar las líneas que siguen en intentar clarificar (1) qué aporta la categoría 'género' como categoría de análisis jurídico en el ámbito de la violencia contra las mujeres y, por otro lado, (2) en qué términos el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de los preceptos penales cuestionados.

Con respecto a la primera cuestión resulta esencial distinguir entre sexo y género. 'Sexo' las diferencias biológicas de mujeres y hombres y 'género' la construcción cultural que sobre el sexo biológico nuestra forma de socialización patriarcal ha articulado dando lugar a relaciones asimétricas de poder. La distinción no resulta anodina toda vez que permite cuestionar la aparente neutralidad sexual a partir de la cual se construyen las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales y, por supuesto, personales. La categoría 'género' permite trasladar el debate al espacio público/político transformándose en un debate político y, por tanto, de poder. Y es ahí donde surgen las reticencias a la hora de conceptualizar la violencia contra las mujeres como violencia de género porque se erige en un instrumento capaz de articular cambios de calado en la organización socio/sexual de la realidad. Obviamente, hablar de cambios desde esta perspectiva implica cuestionar privilegios y, por ende, formas de ser y estar en cualquier ámbito relacional.

Llegados a este punto conviene centrar las líneas que siguen en el aval constitucional de la LO 1/2004, de 28 de diciembre. Un aval que se concretó en la STC 59/2008, de 14 de mayo con reflejo en otras posteriores (SSTC 127/2009; 45/2010; 79/2010). Son de significar los siguientes ítems:

- El máximo intérprete constitucional se hace eco de su doctrina en materia de igualdad constitucional advirtiéndose una cierta consolidación del llamado *derecho desigual igualatorio*.
- Especialmente significativo resulta el FJ 5 de la STC 59/2008 en donde concreta la doctrina constitucional sobre igualdad y precisa que la igualdad es un derecho subjetivo de la ciudadanía a obtener un trato igual

que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlos y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten desproporcionadas.

- Lo expuesto permite deducir que la igualdad requiere que a iguales supuestos de hechos las consecuencias jurídicas sean las mismas. No obstante, ¿qué ocurre cuándo los supuestos de hecho no son iguales? ¿Qué ocurre cuándo tras el análisis crítico de casos se evidencia que la situación de partida de las mujeres en el ámbito relacional/afectivo se basa en una desigualdad socio/sexual/estructural?
- Las cuestiones planteadas permiten colegir que no toda diferencia en el trato normativo supone un trato discriminatorio proscrito constitucionalmente. El Tribunal Constitucional lo deja claro cuando alude al *tertium comparationis*, al *test* de razonabilidad, al *test* de racionalidad, a la congruencia de la medida diferenciadora y a la proporcionalidad.
- El Tribunal Constitucional consideró que no se puede calificar de irrazonable la opción normativa que el legislador adoptó en su día puesto que *"(...) las agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su pareja afectiva tienen una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito relacional porque corresponden a un arraigado tipo de violencia que es manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres"*.

Finalmente, con respecto al reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y derechos reproductivos, resulta importante precisar que su incardinación –desde el punto de vista de la subjetividad jurídica de las mujeres– debe enmarcarse dentro de un nuevo derecho a la autonomía corporal (derecho al propio cuerpo) y, más específicamente, como baluarte del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Y es que solo desde esta articulación constitucional se podrá romper con el carácter funcional del cuerpo de las mujeres para el sistema sexo/género. Un carácter funcional que ha condicionado la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto se podría decir que han sido configuradas como lo *'otro'* al sujeto universal. Por tanto, como sujetos heterónomos en el ámbito sexual y reproductivo, esto es, sujetos sobre los que otros deciden. Cabría aludir a una subjetividad fragmentada (o periférica) que ha servido de excusa para legitimar el control social (y estatal) sobre la actividad sexual y/o reproductiva de las mujeres. El momento actual requiere revertir esta situación de ahí que se inste a cumplir con el marco jurídico internacional y, por ende, garantizar la dimensión internacional del texto constitucional en materia de derechos fundamentales (artículo 10.2 CE) y, en concreto, en lo que atañe a la delimitación constitucional de los derechos de las

mujeres en el ámbito sexual y en el ámbito reproductivo. Significativas resultan las siguientes líneas extractadas de la *Plataforma de Acción de Beijing* (1995):

"(...) los derechos humanos de las mujeres, incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia".

En línea con lo anterior cabría citar la *Declaración Conjunta sobre derechos sexuales y derechos reproductivos*, adoptada en la 57ª Sesión del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (2014), en donde se insta a los Estados a que adopten las medidas para asegurar el total respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La *Declaración* exhorta a los Estados miembros a adoptar todas las medidas legislativas para prevenir, prohibir, castigar y erradicar todas las violaciones de los derechos humanos que se ejerzan contra las mujeres. Y en este ámbito ha sido la propia CEDAW la que no ha dudado en resaltar que el derecho a la autonomía corporal requiere de medidas que garanticen el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el cuidado post-aborto, el diagnóstico y tratamiento oportuno ante infecciones de transmisión sexual así como el acceso a métodos anticonceptivos que puedan prevenir embarazos no deseados.

A nivel normativo interno es de reseñar la *Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Salud Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo*. Una norma clave para la subjetividad jurídica y política de las mujeres. Y es que, por primera vez, la interrupción voluntaria del embarazo sale del Código Penal y se enfoca desde el reconocimiento de la autonomía individual de las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo. No obstante, una norma cuya vigencia y consolidación pende, por una parte, (1) del pronunciamiento del Tribunal Constitucional al estar recurrida desde 2010 ante dicho órgano y, por otra, (2) de los intentos de determinados partidos políticos de modificarla y/o derogarla apostando por volver a la ley vigente en 1985, ignorando los términos en los que el Tribunal Constitucional se pronunció en la STC 53/1985, de 11 de abril. Una sentencia nuclear a la hora de delimitar los derechos susceptibles de entrar en conflictos ante cualquier interrupción voluntaria del embarazo, precisando el máximo intérprete de la Constitución que los únicos derechos afectados en esta materia son los derechos de la mujer embarazada –único sujeto titular de derechos por su condición de persona (artículos 29 y 30 del Código Civil)–. Por tanto, no se está ante una colisión de derechos sino ante un conflicto entre una serie de derechos fundamentales de la mujer embarazada y un bien jurídico protegido (*nasciturus*). Abundando más en la materia resulta importante significar cómo –en palabras del Tribunal Constitucional– el *nasciturus* en cuanto

"(...) momento de desarrollo de la vida misma" es un bien protegido por el artículo 15 pero no es titular del derecho a la vida de lo que se deriva que su protección no tenga carácter absoluto. En este sentido, y en tanto titular de derechos, la dignidad de la mujer embarazada –en caso de conflicto– no se puede ignorar. Dignidad que compete al Estado proteger y tutelar y que se proyecta en la autodeterminación consciente en el ámbito sexual y reproductivo en el marco del reconocimiento de la autonomía corporal.

V. Conclusiones

En pleno debate sobre la reforma/revisión constitucional el título del presente artículo '*Las mujeres como sujeto constituyente: la crisis de los 40 ante la reforma constitucional*' permite aventurar una lectura crítica desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en relación con las propuestas de reforma realizadas en aras de una renovación del pacto de convivencia social. Y es que hablar de las mujeres como sujeto constituyente implica tomar en consideración aspectos nucleares – como los analizados en este trabajo – para una verdadera consolidación de la subjetividad jurídica y política de más de la mitad de la humanidad. Se trata de reivindicar el papel de las mujeres como sujetos del pacto constitucional y esto obliga a un abordaje desde la perspectiva de género. Perspectiva –a todas luces crítica– con la forma de socialización diferenciada del sistema sexo/género y con los conflictos no resueltos en el actual texto constitucional. De ahí que –a modo de síntesis– se expongan sucintamente los aspectos esenciales a tener en cuenta que se erigen en propuestas ante una futura reforma/revisión constitucional:

- Renovar el consenso constitucional desde una óptica integradora con el sentir social y vivencial de las mujeres como sujetos constituyentes. Esto implica abordar la reforma/revisión constitucional desde una visión sensible al género.
- Constitucionalización de la paridad como reconocimiento de la *mixitud* humana, esto es, como reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos y, por ende, como fundamento de la representación y participación democrática.
- Fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género como reconocimiento del conflicto socio/sexual no resuelto en el texto constitucional. Esto implica una delimitación conceptual, en sede constitucional, de la violencia de género como la manifestación violenta de la desigualdad, como una forma de discriminación del sistema sexo/género y como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Desde esta óptica de análisis surge la obligación de los Estados (y poderes públicos) de actuar en el marco de la diligencia debida.
- Reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y derechos reproductivos enmarcados no solo desde el ámbito de la protección de la

salud sino como reconocimiento expreso de la autonomía corporal de las mujeres y el derecho de éstas a decidir libremente sobre su maternidad.

- Interpretación y aplicación normativa desde la perspectiva de género como garantía específica de los derechos de las mujeres (extrapolable a la sociedad en general) en el marco de un nuevo contrato socio/sexual.

BIBLIOGRAFÍA

- *Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana sobre la Reforma Constitucional* de febrero de 2018 en el siguiente enlace. Recuperado de: <http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/Acuerdo+del+Consell+sobre+la+reforma+constitucional.pdf/ecc2fe28-4b83-4606-97db-d582d726b27b> (fecha de consulta: 22/12/2018).
- ASTOLA MADARIAGA, Jasone: "El género en el lenguaje jurídico: utilización formal y material", en MONTESINOS SÁNCHEZ, Nieves y ESQUEMBRE CERDÁ, María del Mar (coords.), *Mujeres en democracia, Feminismos/s* 12, Centro de Estudios de la Mujer, Universidad de Alicante, 2008, pp. 33 y ss.
- BENHABIB, Seyla: *El ser y el otro en la ética contemporánea*, Gedisa, Barcelona, 2009.
- BONETTO DE SCANDOGLIERO, María Susana y PIÑERO DE RUIZ, María Teresa: "Teoría Crítica del Derecho", en *Revista Estudios*, nº 3, 1994, pp. 63-71.
- DE CABO MARÍN, Carlos: *Pensamiento crítico, Constitucionlismo crítico*. 1ª edición, Trotta, Madrid, 2014.
- DE CABO MARÍN, Carlos: *Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución*, Trotta, Madrid, 2010.
- *Declaración de Intenciones* aprobada por la Red Feminista de Derecho Constitucional en el marco del *XII Encuentro* de Biar: "Reforma constitucional, nuevo escenario político y perspectiva de género" que tuvo lugar en la Sede Universitaria de Biar los días 15, 16 y 17 de julio de 2015. Recuperado de: <http://feministasconstitucional.org/declaracion-de-intenciones-de-la-rfdc-xii-encuentro-biar-2015/> (fecha de consulta: 22/08/2017).
- ERIKSON, Erik: *Identidad, Juventud y Crisis*, Paidós, Buenos Aires, 1968.
- ESQUEMBRE CERDÁ, María del Mar: "Las mujeres ante el cambio constitucional. Algunos apuntes desde una perspectiva feminista para una "reforma constituyente" de la Constitución española", en *Revista "Cuadernos Manual Giménez Abad"*, nº Extra 5, 2017, pp. 75-92.
- FACIO, Alda: *Feminismo, género y patriarcado*. Artículo en línea, 1990. Recuperado de: <http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Feminismo-g%C3%A9nero-y-patriarcado.-Alda-Facio.pdf> (fecha de consulta: 22/08/2017).
- GALLEGO DÍAZ, Soledad y DE LA CUADRA, Bonifacio: *Crónica secreta de la Constitución*, Tecnos, Madrid, 1989.
- GARCIA NEUMANN, Jaime: "La especulación financiera como delito contra la humanidad. Fundamentos de la historia de la economía", en *Vía Inveniendi et Iudicandi*, vol 6, nº 1, 2010, pp. 1-49.

- GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar: *Una Constituyente feminista: ¿Cómo re-formar la Constitución con perspectiva de género?*, Marcial Pons, Madrid, 2017.
- HUNT, Lynn: *La invención de los derechos humanos*, Traducción de Jordi Beltrán, Tusquets, Barcelona, 2009.
- Informe sobre Modificaciones de la Constitución Española del Consejo de Estado, 2006. Recuperado de: <http://www.consejo-estado.es/pdf/modificaciones%20constitucion%20esp.pdf> (fecha de consulta: 19/06/2017).
- LAFFAYE, Sebastián y LUCÁNGELI, Jorge: "A tres años de la caída de Lehman Brothers", en *Revista del CEI. Comercio Exterior e Integración*, nº 19, 2011, pp. 21-32.
- MARTÍNEZ SAMPERE, Eva: "Hacia la plena ciudadanía", FREIXES SAN JUAN, Teresa y SEVILLA MERINO, Julia, Género, *Constitución y Estatutos de Autonomía*, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2005, pp. 45-66.
- NÚÑEZ VAQUERO, Álvaro: "Teorías críticas del derecho: observaciones sobre el modelo de ciencia jurídica", en *Anuario de filosofía del derecho*, nº 26, 2010, pp. 413-434.
- NUSSBAUM, Martha: *Women and Human Development: the capabilities approach*, CUP, 2000.
- OEDC (2017): *The Pursuit of Gender Equality: an uphill battle*. Informe en línea. Recuperado de: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-pursuit-of-gender-equality_9789264281318-en (fecha de consulta: 04/10/2017).
- OLSEN, Frances: "El sexo del Derecho", en KAIRYS, David (ed.), *The Politics of Law*, Traducción de Mariela Santoro y Christian Courtis, Nueva York, Pantheon, pp. 452-467.
- PÉREZ ROYO, Javier: *La Reforma Constitucional Inviabile*, Catarata, Madrid, 2015.
- PITCH, Tamar: "Sexo y género de y en el Derecho: el feminismo jurídico", en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 44, 2010, pp. 435-459.
- PINEDA SALIDO, Luis: "La crisis financiera de los Estados Unidos y la respuesta regulatoria internacional", en *Revista Aequitas*, vol. 1, 2011, pp. 129-214.
- Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE núm. 257, de 27 de octubre de 2015). Recuperado de: <https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11505.pdf> (fecha de consulta: 22/07/2017).
- Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones (BOE núm. 107, de 3 de mayo de 2016). Recuperado de: <https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4280.pdf> (fecha de consulta: 19/06/2017).
- RIFKIN, Janet: "Toward a Feminist Jurisprudence", *Harvard Women's Law Journal*, 3, 1980, pp. 83-95.

- SAID, Edward W.: *Cultura e imperialismo*, Anagrama, Barcelona, 1996.
- SCOTT, Joan W.: "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en AMELANG, James S. y NASH, Mary (coords.): *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, Institució Alfons el Magnànim, 1990, pp. 23-58.
- SEVILLA MERINO, Julia: "Representación y lenguaje", en MONTESINOS SÁNCHEZ, Nieves y ESQUEMBRE CERDÁ, María del Mar (coords.), *Mujeres en democracia, Feminismos/s 12*, Centro de Estudios de la Mujer, Universidad de Alicante, 2008.
- SEVILLA MERINO, Julia y otras (coords.): *Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente*, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006.
- SPIVAK, Gayatri Chakrovorty: "¿Puede hablar el subalterno?", en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 39, Bogotá, 2003, pp. 297-364.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "El discurso jurídico sobre el cuerpo de las mujeres; o, la artificiosa articulación del derecho a la gestación por sustitución", en CARRIO SAMPEDRO, Alberto (ed.), *Gestación subrogada. Análisis crítico y propuestas de regulación*, Col. Filosofía y Derecho, Marcial Pons, Barcelona, 2019.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "Iusfeminismo, género y discurso jurídico: análisis desde la praxis y estado de la cuestión", en *Revista Pensamiento Constitucional*, nº 23, Perú (en imprenta), 2019.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: *Guie per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia*. Editor: Xarxa Vives d'Universitats, 2018.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "El sustento constitucional de la im-partición de Justicia desde la perspectiva de género. En el monográfico "Mujer y Constitución" de la Revista Peruana de Derecho Constitucional, nº 10, diciembre 2017, pp. 181-214.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "Epistemología feminista y constitucionalismo crítico: premisas metodológicas para la reflexión dialéctica", en DE CABO MARÍN, Carlos, ASENSI SABATER, José, y BALAGUER CALLEJÓN, Francisco: *Constitucionalismo crítico: Liber amicorum Carlos de Cabo Marín*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 381-398.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "Mujeres y cuerpos o la Transición desde los márgenes: el olvido intencionado de los derechos sexuales y reproductivos", en *I Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política "Transiciones en Marcha"*, MAÑAS, Carmen y otras, Universidad de Alicante, 2015, pp. 98-111.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: cuerpos y subjetividad desde la periferia constitucional", en León Alonso, Marta y Sgró Ruata, María Candelaria (comp.): *La reforma del aborto en España: perspectivas de un debate (re)emergente*, 2014, pp. 119-148.
- TORRES DÍAZ, María Concepción: "El derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental: crítica constitucional desde el paradigma feminista", en VV.AA.: *Igualdad y democracia: el género como*

categoría de análisis jurídico. Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla, 2014, pp. 641-655.

• VALLEJO ZAMUDIO, Luis E.: "La crisis financiera: génesis y repercusiones", en *Apuntes del CENES*, vol. XXIX, nº 49, 2010, pp. 9-30.

Resumen / Abstract

El 6 de diciembre de 2018 la Constitución española cumplió 40 años. Una fecha clave para pensar y repensar el texto constitucional desde la óptica de las mujeres como sujeto constituyente. Por tanto, desde las experiencias y vivencias de las mujeres ante el pacto de convivencia social. Y es que tras 40 años de vigencia constitucional en donde el modelo normativo de lo humano se ha venido desarrollando haciendo abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos y de sus implicaciones en la organización socio/sexual de la realidad, el momento actual requiere del reconocimiento de dos sujetos igualmente diferentes – sin necesidad de que uno sea el modelo del otro-. El momento actual demanda una redefinición del sujeto 'persona' y una resignificación de la categoría 'sexo' como hecho biológico que implica diferencia mutua entre los sujetos sin necesidad de que exista un patrón de referencia al que haya que adaptarse o en el que haya que encajarse. Y todo ello pese a los avances normativos y jurisprudenciales en materia de igualdad de mujeres y hombres.

En este punto, conviene significar cómo la celebración del cuadragésimo aniversario de la norma suprema no ha sido algo anodino. Máxime porque ha permitido echar la vista atrás y revisar críticamente los avances sociales (y no solo) conseguidos y los retos todavía pendientes. Obviamente, toda revisión crítica exige que se lleve a cabo valiéndose del 'género' como categoría de análisis jurídico y, por ende, constitucional si se quiere evitar que el texto constitucional entre en la llamada 'crisis de los 40'. Un concepto de 'crisis de la mediana edad' conceptuada por autores como Erik Erikson (1968) y otros y a partir del cual se ha acuñado la idea de un cierto estancamiento de proyecto vital. De ahí la necesidad de revitalizar y renovar el consenso constitucional desde una óptica integradora con el sentir social y vivencial de las mujeres y, por ende, de la sociedad en general. Y todo ello a fin de garantizar, entre otros, (1) el reconocimiento constitucional de la paridad, (2) el derecho a una vida libre de violencia de género y (3) la fundamentalidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

PALABRAS CLAVE: Mujeres y Sujeto Constituyente, Reforma-revisión Constitucional, Igualdad y No Discriminación, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Paridad, Violencia de Género.